

Argentina 2002-2011: neodesarrollismo y radicalización progresista

*Gastón Angel Varesi**

El presente artículo propone analizar la dinámica político-económica posconvertibilidad, poniendo énfasis en el contexto de la crisis mundial, observando las disputas entre distintos proyectos así como sus asideros políticos y sus vinculaciones con las fracciones de clase.

En primer lugar, el autor introduce algunos apuntes teóricos sobre el concepto de *modelo de acumulación*. Luego, realiza un ejercicio de periodización y caracterización del modelo posconvertibilidad. Posteriormente, se sostiene que a partir del “conflicto del campo” se instituyó un punto de inflexión que puso en crisis el momento hegemónico alcanzado hacia 2006. En este contexto el kirchnerismo comenzó a impulsar un proceso que denomina *radicalización progresista*. La profundización de la crisis mundial constituye el marco de acción en el que se despliegan tanto un plan anticrisis de corte neodesarrollista como un conjunto de políticas progresivas que confrontan con distintas fracciones y agentes al interior de la clase dominante, procurando preservar alianzas dentro del bloque de poder así como dentro de las clases subalternas. En este punto, el autor se detiene a reflexionar en torno de algunas políticas clave del período 2008-2010 como la estatización de las AFJP, la “Ley de Medios” y la Asignación Universal por Hijo. También analiza los rasgos de la dinámica conflictiva actual y su papel en la radicalización progresista. Finalmente, evalúa los alcances y límites que se manifiestan en el despliegue de la estrategia oficial y su proyecto neodesarrollista.

* Sociólogo, UNLP. Becario del CONICET. Investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP). Prof. del seminario sobre “Hegemonía, intelectuales y clases sociales” FTS-UNLP. Coordinador del equipo de investigación sobre Estructura de clase, modelo de acumulación y políticas económicas de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP). Miembro del GT sobre Economía Mundial, Economías Nacionales y Crisis Capitalista de CLACSO. Correo: gastonvaresi@hotmail.com.

1. Hacia una conceptualización del modelo de acumulación

El concepto *modelo de acumulación* aparece utilizado en numerosos trabajos, pero su indefinición sistemática y polivalencia son notorias. Proponemos analizar el modelo de acumulación a partir de tres núcleos constitutivos: las políticas económicas, las variables económicas y las fracciones de clase. Retomamos la sugerencia de Basualdo (2007) de identificar relaciones de *regularidad* y *prelación*, que dicho autor utiliza con el fin de caracterizar un *régimen de acumulación*, pero entre ambos conceptos marcamos diferencias constitutivas: a) de escala temporal: períodos de largo plazo en el régimen y de más corto plazo en el modelo (permitiendo la identificación de distintos modelos a lo largo de un mismo régimen de acumulación) y b) de escala territorial: la posibilidad de un régimen de abarcar varias formaciones sociales y la limitación del modelo en una escala nacional, ligada con el rango de las políticas del Estado nacional (Varesi, 2010).

Podemos hablar de *modelo de acumulación* cuando es posible identificar regularidades y prelación (en el sentido de jerarquía explicativa) tanto en el nivel

estructural, que contiene los núcleos de fracciones de clase y de variables económicas¹, como en el nivel superestructural, de las políticas. Las políticas constituyen acciones estatales que definen las “reglas de juego” (evocando a Bourdieu) y marcan el campo de acción de los agentes, encuadrados en una relación de fuerzas particular. Asimismo, en el modelo de acumulación se manifiestan elementos sedimentados de las lógicas previas de modelos (y regímenes) anteriores evidenciados en diversas variables económicas que sólo son modificables en mediano o largo plazos, como por ejemplo la concentración y extranjerización económica, y es por esto que el modelo no puede ser reducido a las políticas o al proyecto de gobierno. A su vez, el modelo presenta una particular correlación de fuerzas entre las distintas fracciones de clase, permitiéndonos observar qué colectivos de agentes aparecen beneficiados y perjudicados por el nuevo estado de cosas.

Así, el modelo de acumulación es la forma que adquiere el proceso de *reproducción ampliada del capital* (Marx, 2007 [1885]) en un espacio y tiempo determinados en el cual se observan relaciones de regularidad y prelación de variables estructurales y superestructurales en un nivel de mayor espe-

¹ Las variables económicas pueden ser diferenciadas, a su vez, entre variables de desempeño, más sensibles en el corto plazo a la acción estatal, y variables económico-estructurales, que expresan procesos profundos sólo modificables en un plazo mayor

cificidad que en el régimen de acumulación que lo contiene. Es en esta interrelación de los distintos núcleos conceptuales antes señalados que se gesta la *reproducción ampliada de las clases sociales* (Poulantzas, 1981), que es a su vez, reproducción de los *lugares* (en el sentido de la posición en la estructura) y la reproducción y distribución de los *agentes* mismos en dichos lugares. Esta dinámica nos permite realizar una construcción analítica de las fracciones de clase como colectivos de agentes que comparten un *lugar* común, una *posición* (Gramsci) en la estructura.

Ahora, como advierte Poulantzas, “las clases sociales no existen sino en la lucha de clases, con dimensión histórica y dinámica. La constitución de las clases, de las fracciones, de las capas, de las categorías, no puede hacerse más que tomando en cuenta esta perspectiva histórica de la lucha de clases” (1981:27). Es por esto que analizar las fracciones de clase implica estudiar sus relaciones de fuerza. Este proceso de lucha de clases tiene un elemento destacado en el Estado. Según Poulantzas “El Estado capitalista, sin dejar de representar de manera predominante los intereses de la clase o fracción hegemónica -esta misma *variable*-, reviste una *autonomía relativa* respecto de esta clase y fracción y respecto de las demás clases y fracciones en el poder. De una parte, porque asegura el *interés político general*

del conjunto del bloque en el poder, al organizar el “equilibrio inestable de compromisos” (Gramsci) (...). De la otra, porque organiza esta hegemonía respecto del conjunto de la formación social, por lo tanto igualmente respecto de las clases dominadas” (Poulantzas, 1981:90). Para nuestro trabajo, cobra importancia entonces el análisis de las políticas económicas como acción o intervención estatal porque las mismas inciden en la configuración y mantenimiento de un modelo de acumulación reorganizando de manera singular los equilibrios inestables entre las fracciones de clase en estrecha vinculación con los cambios en sus relaciones de fuerza. Pero a su vez, la acción estatal se encuentra enmarcada en condiciones económico-estructurales que le preceden, y que fueron consolidándose en etapas anteriores del proceso de reproducción ampliada del capital y de las clases sociales.

2. Modelo de acumulación posconvertibilidad: periodización y características

Como sostuvimos en la declaración del Grupo de Trabajo sobre Economía Mundial, Corporaciones Transnacionales y Economías Nacionales de CLACSO, entendemos que en América latina se expresan actualmente *tres proyectos político-económicos de gobierno*:

“En primer lugar, se encuentran las pretensiones de las clases dominantes y la derecha latinoamericana de utilizar la crisis para imponer un nuevo ciclo de reformas neoliberales, que permita profundizar la transnacionalización y la desnacionalización de las economías, imponer un régimen de incentivos extremos al gran capital, y proseguir con el proceso de redistribución regresiva de ingresos, en detrimento de los fondos de consumo de los trabajadores. Estas pretensiones, se asocian a la estrategia geopolítica de Estados Unidos para América latina, orientada a recuperar las posiciones perdidas durante la última década (...). En segundo lugar, se encuentran los proyectos políticos de los gobiernos que sin pretender producir en lo sustancial una ruptura explícita con las políticas neoliberales, imponen cambios de acento y nuevos énfasis tanto en materia social como en políticas de producción. Se trata de los proyectos *posneoliberales* que se inscriben dentro de una línea neodesarrollista, confían en las posibilidades del capitalismo productivo y nacional, con altos incentivos a la inversión extranjera, y sin compromisos a fondo con políticas redistributivas. En tercer lugar, se encuentran los proyectos político económicos de los gobiernos basados en una importante movilización social y popular, con una voluntad expresa de cambio, a favor de una ruptura con las políticas hasta ahora imperantes, en defensa de un proyecto de soberanía, autodeterminación, y de nuevo entendimiento de la economía y de la integración de la región y los pueblos. En algunos de estos países, se ha anunciado el emprendimiento de transformaciones hacia el socialismo, y se han

adelantado importantes medidas en ese sentido.” (GT Economía Mundial, 2009)

Estos distintos proyectos de gobierno, con diversos matices en cada formación social, generan a través de sus políticas modificaciones en el proceso de acumulación de capital, contorneado a su vez por los cambios en las relaciones de fuerzas entre las fracciones de clase y las características de las variables económico-estructurales de más largo plazo.

Para el caso argentino, entendemos que el modelo de acumulación actual tiene su origen en el contexto de crisis integral que marcó el agotamiento del “modelo de la convertibilidad” (1989-2001), el cual encarnó la forma más acabada de profundización de la ofensiva del capital efectivizada con la instauración del régimen de acumulación neoliberal (1976-2001). El modelo posconvertibilidad comenzó a configurarse a partir de **seis políticas fundacionales**: 1) la devaluación, 2) la implementación de retenciones a la exportación, 3) la pesificación asimétrica de deudas y depósitos, 4) el “salvataje” al capital financiero, 5) el *default*, 6) el congelamiento y renegociación de tarifas. Estas políticas fueron dando lugar a un nuevo modelo de acumulación que, presentando rupturas y continuidades respecto del modelo de los años '90, se vincularon con cambios particulares en la correlación de fuerzas, definiendo un reparto diferencial de cargas y

beneficios, conformando una primera experiencia que marcaría el inicio de un régimen neodesarrollista.

La **devaluación** generó un tipo de cambio internacionalmente competitivo que permitió a los agentes del capital productivo la dinamización de las exportaciones, y a través de su gravamen mediante retenciones y el aumento de la recaudación tributaria, dio lugar a la recomposición de las cuentas públicas. Esta vía de recuperación económica ha conllevado un aumento de la producción manufacturera, incluyendo un fenómeno incipiente de sustitución de importaciones producto de la protección que generó la modificación del tipo de cambio al aumentar el costo de las importaciones. Por otra parte, el efecto inflacionario ligado con la devaluación redujo sustancialmente el salario real disminuyendo de forma significativa el costo laboral, y junto con el congelamiento relativo de las tarifas de servicios, los precios internacionales favorables y el nuevo tipo de cambio, permitieron a los agentes productivo-exportadores generar elevados márgenes de ganancia y recuperar niveles de actividad económica.

La estructura exportadora se basa principalmente sobre la explotación y procesamiento de recursos naturales, consolidando la reestructuración regresiva de la

matriz productiva local de las últimas décadas. Asimismo, posee un fuerte componente de bienes exportados que son al mismo tiempo productos de consumo masivo de la población, repercutiendo negativamente en el nivel de inflación, socavando el salario real debido a la tendencia del empresariado a “dolarizar” el precio de estos productos para equipararlos con los precios netos de exportación. Es ante esta circunstancia que las **retenciones** procuran, por un lado, limitar la inflación, desdoblado precios internos y externos, y por otro, constituir una herramienta de recaudación fiscal. También persiste una fuerte presencia de la industria automotriz, ligada con el ensamble final y exportación de vehículos.

Asimismo debemos destacar que continúa un perfil altamente concentrado del sector exportador, en tanto las primeras 50 empresas aumentaron su participación en las exportaciones totales pasando de explicar el 36,2% en 1993 en una tendencia creciente que alcanzó el 54,9% en 2007 (año en que explicaron el 80,5% de las exportaciones de las 200 primera firmas)². Además, las principales empresas exportadoras (Repsol, Bunge Arg., Cargill, Aceitera Gral. Deheza, etc.) constituyen, al mismo tiempo, las principales empresas de la estructura económica en su conjunto. El

² Datos tomados de Azpiazu et al, 2011.

dinamismo y concentración de estos actores nos permiten pensar en la configuración de una amplia *fracción productivo-exportadora* del capital, que articula agentes del agro, minería, hidrocarburos, automotrices, siderúrgicas y químicas, y que conforman el núcleo dinámico del modelo posconvertibilidad. El impulso que ha cobrado esta orientación exportadora ha permitido alcanzar un considerable superávit comercial que junto con el superávit fiscal, favorecido vía retenciones, configuran los dos pilares de estabilidad del modelo.

Estos agentes también fueron beneficiados por la **pesificación asimétrica de deudas y depósitos**, que fue el mecanismo implementado durante el gobierno de Duhalde para “socializar” y licuar las deudas de las empresas industriales, el sector agropecuario y las privatizadas³. En aquel contexto, dicho gobierno dispuso un plan de “**salvataje**” al **capital financiero** destinado a compensar a los agentes de ese sector a través de la emisión de nueva deuda pública por un monto total de US\$ 20.379 millones. El capital financiero se encontraba afectado por el **default** en tanto los conglome-

rados financieros eran poseedores de una parte importante de los bonos. El canje desarrollado en 2005 exhibió una significativa quita y una mejora sustancial de los indicadores de deuda/PIB y deuda/exportaciones, aunque también debemos notar que el Estado destinó al pago de deuda partidas superiores al gasto social en salud, educación y vivienda, con el fin de afrontar un arduo calendario de pagos cercano a los US\$ 20.000 millones anuales⁴. Asimismo, la fracción financiera del capital comenzó a ocupar un lugar distinto al propio de los años 90. El descenso de la tasa de interés real y el hecho de que la rentabilidad bancaria no esté dada por los resultados de las tasas de interés sino por la simple tenencia de bonos y los servicios (Sevares 2010), implica (más aún con la caída de la convertibilidad de la moneda que operaba como seguro de cambio gratuito) un corte en el proceso de “valorización financiera” del capital característico de los años ‘90 con su circuito ligado con el endeudamiento externo, derivación improductiva de recursos de grandes empresas al sistema financiero procurando aprovechar el diferencial positivo entre

³ La pesificación asimétrica implicó que los bancos debieran devolver los depósitos en dólares a \$1,40 por cada US\$1, mientras que los deudores con la banca local verían pesificadas sus deudas en dólares a \$1 por US\$1. Cuando el *lobby* empresarial logró forzar al gobierno a derogar el techo impuesto inicialmente para la pesificación de deudas (US\$ 100.000), ésta se convirtió en un mecanismo de licuación de las deudas del capital.

⁴ Debe observarse también que la deuda se financia a través de una estructura impositiva sumamente regresiva.

las tasas de interés internas y externas, posterior fuga de capitales y quiebra de las cuentas del Estado. De este modo, el capital financiero dejó de constituir un eje articulador en el nivel del modelo de acumulación, si bien continúa cumpliendo un rol básicamente especulativo ya que su rentabilidad se explica en primer lugar por la simple tenencia de bonos de deuda (y luego por los servicios prestados). Así, desde 2005 las rentabilidades bancarias se recuperaron y comenzaron a mostrar un importante incremento.

Otra de las políticas fundacionales señaladas es el **congelamiento y rediscusión tarifaria** que afectó a las privatizadas. El gobierno de Duhalde desplegó una estrategia dual, por un lado, beneficiando a las empresas ubicadas en áreas no sensibles al consumo popular y, por otro, dilutando las negociaciones en todas las áreas sensibles para dejarlas al gobierno siguiente (Azpiazu y Schorr, 2003). Luego, el gobierno de Kirchner desarrolló una estrategia heterogénea consistente en tres acciones estatales: renegociación, reestatización y creación de empresas estatales, persiguiendo tres objetivos: 1) dismantelar los procesos judiciales que muchas privatizadas llevaron al CIADI; 2) mantener el nuevo esquema de precios relativos favorables a la producción de bienes transables; y 3) aumentar la influencia del Estado en determinadas áreas. Los gobiernos pos-

convertibilidad, si bien asumieron una postura de mayor firmeza frente a las privatizadas, no desplegaron un proyecto de recuperación de los servicios y recursos estratégicos. Asimismo, las reestatizaciones avanzaron primordialmente sobre los casos más escandalosos de la gestión privada. La contención de las tarifas favoreció a las clases subalternas y a los productores de bienes transables, evidenciando modificaciones en las relaciones de fuerzas en detrimento de las empresas de servicios, que conformaban parte del núcleo "ganador" de los años 90, aunque han sido parcialmente compensadas por una política de subsidios (Varesi, 2009a).

En este punto, se hace imprescindible establecer la **periodización** del modelo posconvertibilidad. Si tenemos en cuenta que las principales políticas fundacionales del modelo fueron perfiladas a partir de la *Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario 25561* promulgada el 6 de enero de 2002, será entonces éste el año de inicio del modelo actual.

El punto de partida es fundamental para analizar los alcances y límites del neodesarrollismo. Esto se debe a que la evaluación es muy diferente según se considere 2002 o 2003 como año de inicio, ya que en 2002 no sólo se gestan estas políticas que instituyen de modo relevante cambios en el proceso de acumulación y

comienzan a plantear las regularidades que nos permiten hablar de un *modelo*, sino que 2002 marca también el punto de mayor deterioro histórico de los indicadores sociales, con dramáticas consecuencias en las condiciones de vida de las clases subalternas. En diversos trabajos se señala el punto de partida del actual modelo en 2003: partiendo de este punto y excluyendo las implicancias de 2002, se habla de un modelo basado sobre la industria y el trabajo, progresivamente distributivo. De hecho todos los indicadores muestran mejora desde ese punto, y efectivamente existe un cambio progresivo clave en el nivel político: la asunción de Néstor Kirchner y el desarrollo del kirchnerismo como una corriente (y cultura) política particular dentro del peronismo. Pero en términos de modelo de acumulación, no podemos dejar de notar que es en 2002 cuando se marcaron las fundamentales rupturas tanto en el tipo de cambio, como en el nuevo esquema de precios relativos favorable a la producción de bienes transables, se gestó el inicio del proceso inflacionario, se operó la licuación de deuda privada a través de la pesificación asimétrica, ya se había establecido previamente el *default*, y se realizó el “salvataje” al capital financiero, que junto con los subsidios comenzaron a gestar un sistema de transferencias de recursos que buscó reorganizar el equilibrio inestable de compromisos entre

las fracciones de clase en el marco de una nueva correlación de fuerzas. Es también a partir de estas políticas que en 2002 se produjo una reducción sustantiva del salario real y un retroceso de los trabajadores en la distribución del ingreso. Desde nuestro punto de vista, es esta contracción, en el marco de un escenario internacional favorable, una de las claves del inicio de la fase expansiva del ciclo de acumulación, ya que impulsó altas tasas de rentabilidad para el capital. Si bien 2002 es el inicio del modelo actual, las políticas más progresivas gestadas desde 2003, marcan un giro en el nivel de la intervención estatal, impulsando recuperaciones de los niveles de vida de las clases subalternas, aunque con presiones empresariales que buscan limitar la participación de los trabajadores y sus salarios reales a niveles de la década de los ‘90.

A partir del gobierno de Kirchner se han desplegado **cuatro mecanismos** para detener la caída del salario real e impulsar distintos grados de recomposición del ingreso (Varesi, 2009b). 1) El aumento del salario mínimo, que se dio a partir de la convocatoria al “Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil”, revalorizando las mediaciones sindicales y patronales, y que sería incrementado anualmente. 2) La multiplicación de los convenios colectivos marcan una ruptura con las déca-

das previas, permitiendo importantes recuperaciones del salario real, aunque esto se dio de forma dispar y sin alcanzar al amplio conjunto de los trabajadores no registrados. 3) Se extendió la jubilación mínima a 1.800.000 jubilados que se encontraban por fuera del régimen. Las mismas fueron elevadas desde los \$ 200 mensuales a los \$ 596 en agosto de 2007, aunque a pesar de los aumentos ésta quedó muy por debajo de la línea de pobreza establecida en \$ 923 (julio 2007). 4) El gobierno impulsó acuerdos de precios con los principales productores y comercializadores, incluyendo la adjudicación de subsidios, para intentar contener la inflación. Las retenciones a las exportaciones actuaron también en el mismo sentido. Aun así ya desde 2007 volvió a desatarse una fuerte presión inflacionaria.

Estas políticas tuvieron un efecto positivo, pero limitado y dispar. El **efecto positivo** se destaca en el aumento de los ingresos reales y mejora de los indicadores sociales respecto del momento de su aplicación, elevando sobre todo los “pisos” de ingresos. Pero contienen un efecto **limitado** en lo general relacionado a que, si bien se incrementan los salarios reales, la participación de los asalariados en el PIB se ubicó en 2007 al 28%, aún por debajo del 31% que alcanzaba en 2001, lo que parece mostrar un “techo” que no modifica la distribución funcional. El impacto de las distintas medi-

das distributivas ha sido **dispar** en lo particular, ya que dentro de los asalariados puede percibirse una fractura en dos sentidos: por un lado debido a que en la estructura de ingresos de los trabajadores formales “el 11,9% de ellos concentran el 32,5% de la masa salarial total, mientras el 61,1% de los trabajadores formales perciben el 30,6% de la misma” (Lozano, 2008:9) y por otro lado, porque pueden observarse evoluciones distintas entre los trabajadores registrados del sector privado, cuyos salarios reales en 2007 muestran mejoras respecto de 2001, los trabajadores no registrados con pérdidas del 13,3% y los estatales que obtuvieron un salario real un 21,7% menor en el mismo periodo (Lozano, 2008).

Observamos, en síntesis, que en el periodo 2002-2007 se configuró un nuevo modelo que procura saldar la crisis de 2001, en el que el Estado emerge como un actor fundamental en la movilización de recursos a través de diversos mecanismos de transferencias que, si bien se enlazan con cambios en la correlación de fuerzas entre las distintas fracciones de clase, busca gestar un nuevo momento conciliatorio en la administración de la fase expansiva del ciclo económico. Se observa entonces un nuevo cuadro de relaciones de fuerzas con una fracción productivo-exportadora como principal beneficiaria de la posconvertibilidad, y el capital financiero y las empresas de ser-

vicios privatizadas perdiendo posiciones relativas, aunque siendo parcialmente compensadas por distintos mecanismos.

En 2005 el rechazo al ALCA y la pujante integración latinoamericana reforzaron el alejamiento del paradigma neoliberal, y junto con el abanico de políticas económicas mencionadas dieron lugar a rasgos neodesarrollistas en el modelo. Este modelo se legitima tanto por las políticas de ingresos y las mejoras en las clases subalternas desde 2003 como también a través de una fuerte reducción del desempleo, de 23,3% en 2002 a 7,3% en 2007, ligada con el perfil más productivo del modelo evidenciado en el aumento de producto industrial en un 63,4% en dicho periodo, claramente contrastante con el desempeño desindustrializador de los años 90. Podemos visualizar una fracción de pequeñas y medianas empresas, que se constituyen en agentes fundamentales para explicar el aumento del empleo, pero que poseen baja productividad (exhibiendo una tendencia al estancamiento o contracción de la productividad laboral). De este modo, encontramos un escenario complejo en tanto las PyMEs, aún obteniendo una rentabilidad que triplica la del promedio que obtenían en los años 90 y estando relativamente protegidas por la política cambiaria frente a la presión de los productos importados, ven duplicar la brecha de rentabilidad respecto de las grandes empre-

sas (Kulfas, 2011).

El conjunto de políticas mencionadas lograron reorganizar el “equilibrio inestable de compromisos” entre las fracciones de clase, tanto dominantes como subalternas, en el marco de nuevas relaciones de fuerzas, alcanzando un fuerte desarrollo hegemónico hacia 2006.

3. Dinámica política y política económica en contexto de crisis

2008 constituyó un año de cambios importantes tanto en el nivel político como en el económico. El inicio del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue atravesado por fuertes conflictos detonados a partir de la confrontación de una medida particular de política económica ligada con el cambio del régimen de retenciones pero evidenciando la conformación de un nuevo alineamiento dentro de la clase dominante que salió a disputar la hegemonía hasta entonces estabilizada. Esta crisis de hegemonía, a su vez, se articuló con el contexto de la crisis mundial que comenzó a mostrar sus primeros síntomas.

3.1. Conflicto del campo y derrota electoral

El conflicto que estalló con la “resolución 125” que establecía un aumento en las retenciones a determinados productos del agro, que habían alcanzado un récord

histórico en sus precios, y un régimen móvil de las mismas ligado con el precio internacional, marcó un **punto de inflexión** en diversas dimensiones.

En el nivel de las fracciones de clase, se produjo la particularidad de que los agentes económicos y representaciones corporativas que salieron a enfrentar al gobierno constituían parte de la principal fracción beneficiaria del modelo, la fracción productivo-exportadora del capital. Este fenómeno sólo puede ser explicado atendiendo a las transformaciones de más largo plazo vinculadas con los circuitos productivos del agro, ligados con la “revolución verde” y el proceso de agriculturización (devenido en creciente sojización), y el impacto que dichos procesos tuvieron sobre los agentes económicos. En el nivel estructural venía gestándose en el agro un triple proceso de concentración: a) concentración estructural de la tierra, donde sólo el 4,2% de las explotaciones agropecuarias poseen el 62,8% de las hectáreas totales, con desaparición del 21% de los establecimientos productivos entre 1988 y 2002; b) concentración del capital presente tanto en el desdoblamiento creciente entre propietarios (devenidos en rentistas) y contratistas (propietarios de tierra o no), a la que se suma la concentración del capital en los eslabones finales del proceso productivo en tanto sólo seis empresas

controlan el 80% de la industrialización de la soja; c) concentración de la organización y gestión del proceso productivo mediante grandes empresas agropecuarias-financieras que utilizan la estrategia de armar *pools* de siembra (Varesi, 2010). En simultáneo, la creciente demanda de productos agrícolas explicada en parte por el consumo de China y la mayor demanda mundial de agroalimentos y biocombustibles, impulsaron el incremento del precio de los principales cultivos, primordialmente de la soja, que con el tipo de cambio competitivo habilitaron ganancias y rentas extraordinarias.

La creciente concentración y el claro predominio de los propietarios y rentistas en el proceso productivo fueron clave en el fortalecimiento de dichos agentes que salieron a disputar al Estado las retenciones: uno de los mecanismos fundamentales utilizados para limitar la inflación y transferir ingresos hacia el pago de la deuda, así como subsidios a las privatizadas y hacia las clases subalternas. Es esta dinámica la que se encontró detrás del denominado “conflicto del campo” donde, a pesar de multiplicar su rentabilidad incluso con el nuevo esquema de retenciones, los agentes ligados con el circuito sojero se lanzaron para disputar mayores márgenes de ganancias y rentas extraordinarias⁵.

⁵ Aquí se señalaron principalmente las condiciones estructurales que enmarcaron el conflicto que, más allá de esto, estuvo signado por elementos estrictamente políticos

Es en este enfrentamiento donde comenzó a visualizarse la articulación de un alineamiento que, desde el interior de la clase dominante, se conformó como adversario del oficialismo. Cada vez de forma más clara comenzaron a aparecer articulados un espectro que abarca a agentes y corporaciones del agro, la derecha y centro-derecha política y los principales medios de comunicación. Este alineamiento gestó una ofensiva que no sólo logró derrotar en el Congreso la medida de retenciones móviles, sino que también se mostró triunfal en las elecciones legislativas de 2009, con la relevancia de derrotar en la provincia de Buenos Aires al mismísimo Néstor Kirchner junto con el gobernador Daniel Scioli. Se conformó así un alineamiento que encarna las pretensiones de las clases dominantes de recuperar el paradigma neoliberal como proyecto de gobierno. El oficialismo había dilapidado el consenso hasta entonces alcanzado en un conflicto que había fortalecido y ayudado a articular un adversario con claros ribetes de derecha, que reinstalaba debates con connotaciones culturales de cuño neoliberal, en torno de la libertad de mercado y la “libertad de ganancia” como valores. El escenario poselectoral era de tal incertidumbre que hasta comenzó a hablarse de una posible dimisión de la Presidenta.

Se instituyó así un vértice tanto en los niveles político como económico. En términos políticos se pasará de la búsqueda de consensos, que habían sido desarrollados bajo la estrategia de “transversalidad” y luego de “concertación”, al enfrentamiento abierto con los adversarios. En términos económicos, si bien no se presentan quiebres fundamentales que permitan entrever un cambio en el nivel del modelo de acumulación, sí se observarán medidas fuertes que inciden en las relaciones de fuerza entre las clases sociales, buscando fortalecer la participación de agentes productivos industriales y de las clases subalternas en el alineamiento oficial, que comienzan a constituir el escenario que denominamos como *radicalización progresista*.

3.2. Crisis mundial y políticas anticrisis

En este marco comenzaron a manifestarse los primeros síntomas de la **crisis mundial**, que alcanzó a la Argentina en una etapa que mostraba cinco años de crecimiento a tasas cercanas al 9% anual. Esta crisis cuenta con la singularidad de que se gestó y propagó primero en las economías centrales expandiéndose luego a la periferia. En lo que respecta a la Argentina podemos visualizar **dos mecanismos de propagación** principales: el impacto en materia de comercio exterior y el

que incluyen desde los déficits en la estrategia oficial, el rol opositor y organizador de los medios de comunicación hasta re-traducciones particulares de enfrentamientos históricos como centralismo/federalismo y peronismo/antiperonismo, entre otros.

ajuste en los planes de producción de las empresas.

En relación con el **comercio exterior** se constató la caída del comercio mundial tanto por la caída de las cantidades como de los precios de las exportaciones (principalmente productos primarios y MOI) cortando, en 2008, el crecimiento continuo de las exportaciones locales desde la devaluación. El mantenimiento de la reestructuración regresiva en el sector industrial y la apertura económica tornan a la economía argentina subordinada al precio internacional de los *commodities*, marcando el papel dependiente de su inserción internacional. Los precios de las materias primas que habían alcanzado hacia mediados de 2008 récords históricos, se derrumbaron en el segundo semestre de dicho año (caída del 50% en el precio del petróleo y del 30% en las materias primas restantes) convirtiéndose así en uno de los canales más importantes de propagación de la crisis (Klitenik, 2010). Existe una estrecha relación entre el superávit comercial y el superávit fiscal, que conforman los dos pilares de estabilidad del modelo sobre los que se montan los mecanismos de transferencias de recursos, por lo que la contracción del superávit comercial puede provocar tanto la restricción de divisas como un debilitamiento de las cuentas fiscales. Un dato significativo en ese

sentido fue la disminución del superávit comercial, que en enero de 2009 “se redujo un 27% respecto del año anterior, por efecto de la caída del volumen de exportaciones (-35,8%), pero que fue compensada por una mayor caída del volumen de importaciones (-38,4%)” (Lozano, 2009:6). Esta situación comenzó a revertirse desde abril de 2009, acompañando la variación del precio de los *commodities*.

El segundo mecanismo refiere al **ajuste de planes productivos** por parte de las empresas. Este factor afectó en varios sentidos: una caída en la inversión y el incremento de fuga de capitales, que, junto con el deterioro del comercio exterior, llevaron a la desaceleración del crecimiento, la retracción industrial y al aumento del desempleo. Efectivamente, la Inversión Bruta Interna Fija (IBIF) se contrajo, llegando en el I trimestre de 2009 al pico más fuerte de reducción de la variación anual desde 2002: un -14,2%. Asimismo, la fuga de capitales se triplicó en 2008. Este conjunto de factores acarrió una creciente desaceleración económica plasmada en la variación anual del PIB, que, ubicándose en el III trimestre de 2008 en el 6,9%, cayó hasta el 2% en el I trim. de 2009. Se observó una reducción de la producción de bienes, que tuvo su correlato en la industria, que inició un periodo de contracción⁶. Esto, sumado a la

⁶ En este marco, “Las industrias más afectadas son particularmente las que explicaron y motorizaron el crecimiento de la industria en los años precedentes. Es el caso de la

fuerte desaceleración de la construcción impactó en el empleo: ya en 2007 se frenó la creación de nuevos puestos de trabajo, cortando una tendencia ininterrumpida desde 2003, y en 2008 comenzó a crecer el desempleo, alcanzando el 8,8% en 2009.

En este contexto, el gobierno comenzó a desarrollar un extenso **plan anticrisis** que, a nuestro entender remarca el carácter neodesarrollista del proyecto oficial con sus incidencias en el nivel del modelo de acumulación. De este modo, se lanzó un amplio abanico de medidas encaminadas a mantener los pilares de estabilidad del modelo (superávit comercial y fiscal) y suavizar el impacto de la crisis mundial sobre el PIB y el empleo.

En primer lugar, debemos mencionar una acción estatal fundamental con incidencia en las relaciones de fuerza entre fracciones de clase, así como de adquisición de recursos económicos necesarios para la puesta en marcha del plan anticrisis: la **estatización de las AFJP**, administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones, en gran parte ligadas con los conglomerados financieros. Con esta acción, el Estado transfirió fondos acumulados por \$ 97 mil millones y comenzó a recibir aportes anuales calculados entre \$ 12 y 15 mil millones. Uno de los objetivos de esta medida

apuntó a fortalecer las cuentas fiscales, tanto para impulsar el plan anticrisis como para poder afrontar los pagos de la deuda pública que para 2009 aumentaban a US\$20.000 millones. Además, las AFJP eran importantes acreedores del Estado, ya que más del 50% de los fondos de las AFJP estaban invertidos en bonos de la deuda pública. Esta acción estatal fue cardinal también para mantener el superávit fiscal, uno de los pilares de sustentación del modelo, ya que en enero de 2009 el superávit primario se redujo en un 40% respecto del mismo mes del año anterior, y sin el aporte adicional de los fondos transferidos al Estado hubiera resultado deficitario. Además, buena parte de las medidas anticrisis fueron financiadas a partir de los fondos manejados por el ANSES, el organismo estatal que controla los fondos del sistema de jubilaciones y seguridad social. En este camino, los conglomerados financieros fueron expropiados de un millonario negocio que habían usufructuado desde la ola de privatizaciones de los años 90 y recuperados para la intervención estatal.

El plan oficial para enfrentar la crisis mundial tuvo diversos elementos. En primer lugar, se apeló a la **política cambiaria** con el fin de dar respuesta a la creciente presión de las corporaciones industriales por incrementar la

devaluación. El gobierno, entonces, puso fin a la relativa estabilidad cambiaria en términos nominales, que había rondado los \$ 3,15 por dólar, devaluando gradualmente hasta los \$ 3,95 en 2010. Con esta acción procuró mantener la competitividad internacional del tipo de cambio, para contrarrestar el efecto negativo que la crisis mundial estaba ejerciendo sobre las exportaciones y preservar la producción local frente a los depreciados productos de las economías centrales. Asimismo se implementaron **medidas comerciales**, tales como derechos *anti-dumping*, licencias no automáticas e incremento de los valores de referencia a la importación, tendientes a proteger la producción local en áreas sensibles intensivas en trabajo (Aruguete y Selva, 2009).

El gobierno también desplegó otra serie de medidas orientadas a dar respuestas a las demandas del capital productivo. Podemos mencionar las transferencias indirectas, a través de **exenciones y rebajas impositivas**. Este es el caso de la ley de Promoción de Inversiones de 2008 que promueve la inversión en bienes de capital e infraestructura, reduciendo aranceles de importación y otorgando beneficios impositivos, involucrando fondos por \$ 1.200 millones anuales, aunque su mayoritaria derivación a los princi-

pales grupos económicos profundiza la concentración y financia públicamente inversiones que hubieran podido realizarse por las propias empresas (Ortiz y Schorr, 2009).

También encontramos el **blanqueo de capitales**, que procuró contrarrestar la presión de la fuga de capitales, buscando la declaración de los fondos de los residentes locales en el exterior y su inversión en la economía argentina a través de descuentos tributarios. Esta medida logró el blanqueo de \$ 18.113 millones, involucrando a más de 35 mil contribuyentes.

Otra medida consistió en una amplia **moratoria impositiva** que condonó parte de la deuda a pagar y suspendió las acciones penales ya iniciadas contra los evasores. También promovió el registro de los trabajadores y la regularización de los aportes jubilatorios.

Una acción que, si bien fue inaugurada antes de la crisis, se profundizó durante la misma, y que procura mantener el nivel de empleo a través del subsidio al capital, es el Programa de Recuperación Productiva (**REPRO**). El programa otorga a empresas en crisis un subsidio por trabajador hasta \$ 600 mensuales para completar salario, y cuadruplicó sus fondos a inicios de 2009, alcanzando los \$ 197.000 millones.⁷

⁷ El plan anticrisis contiene también un fondo de \$13.200 millones para incentivo de consumo de sectores de ingresos medios y altos a través de créditos para la compra de

Otro elemento fundamental del plan anticrisis que marca su carácter neodesarrollista ha sido la derivación de recursos hacia la **obra pública**. El gobierno creó un masivo plan de obra pública por \$ 111.000 millones a ejecutarse entre 2009 y 2011, con el fin de generar empleo y hacer frente a la desaceleración del crecimiento económico. El Plan Obras para Todos los Argentinos orienta fondos para obras de infraestructura vial, hábitat social, energía, minería y transporte público.

En las medidas anticrisis orientadas explícitamente a los trabajadores, se destaca el aumento del salario mínimo que pasó escalonadamente de \$ 1.240 a \$ 1.500 en enero de 2010. Finalmente, podemos señalar el paquete de **medidas sociales** que incluyeron un conjunto de iniciativas tales como aumentos en el presupuesto del Plan Alimentario Nacional, un incremento del 50% en el adicional por hijo y la creación de 1.000 cooperativas, cuyo impacto en el empleo se estima en 300 mil puestos, entre otras. Estas medidas implicarían un aumento de \$ 2.000 millones en las partidas destinadas a programas sociales. Si bien en un primer momento sorprendía la escasa cantidad de recursos derivados hacia las clases subalternas, siendo claramente visibles las transferencias hacia el capital productivo, a fines de 2009 se lanzó un plan social clave

en la conformación del proceso de radicalización progresista: la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (**AUH**).

Este conjunto de medidas mostraron capacidad para enfrentar los principales efectos de la crisis mundial, alcanzando a estabilizar hacia 2010 los principales indicadores económicos, reconduciendo a la economía hacia el crecimiento y la generación de puestos de trabajo.

3.3. Asignación Universal por Hijo para Protección Social

La Asignación Universal por Hijo surgió a partir del decreto 1602/09 en octubre de 2009 con el fin de proveer cobertura a la niñez a través de un ingreso mínimo a quienes se encontraban desprovistos del mismo. De este modo se estipuló orientar la asignación hacia los menores de 18 años cuyos padres estén desocupados o trabajen en el sector informal y posean un ingreso menor al salario mínimo.

En primer lugar, la AUH constituye la principal política vertida en el contexto de crisis mundial con una clara orientación hacia las clases subalternas y posee efectos positivos en sus condiciones de vida de forma inmediata. La evaluación de sus impactos presenta serias dificultades para ser establecida con claridad y rigurosidad. Un fac-

autos, utilitarios y camiones, y electrodomésticos, así como para prefinanciar exportaciones y capital de trabajo.

tor destacado es la mejora de todos los indicadores sociales: reducción de la pobreza, indigencia y desigualdad. El problema se encuentra en evaluar su magnitud, ya que las cifras provistas y los trabajos de análisis sobre las mismas aún son limitados por la brevedad del tiempo transcurrido, la disponibilidad de información y, a su vez, por la problemática en torno de la pérdida de confianza en los índices de precios desarrollados por el INDEC. Según un trabajo desarrollado por el CEIL-PIETTE (2009), los indicadores de indigencia se reducen entre un 55 y un 70%, retornando a los mejores momentos de la historia argentina, la pobreza también se reduciría fuertemente y la desigualdad (medida en cuántas veces ganan más los ricos que los pobres) se reduce en más del 30% convirtiendo a la Argentina en el país más igualitario de América latina. Pero los resultados más auspiciosos son alcanzados con el uso de los índices cuestionados. En contraposición, un trabajo de Lozano y Raffo (2010) construye un indicador alternativo a partir de la Canasta Básica Total para una familia tipo que ubicaría la línea de pobreza en \$ 2.114,6, sosteniendo que sólo las familias que poseen un ingreso de \$1.826,60 lograrían

salir de la pobreza obteniendo la transferencia promedio que realiza la AUH (aunque este trabajo comete la arbitrariedad de descontar el 20% sujeto a los criterios educativos y sanitarios), quedando en contrapunto con la canasta del INDEC valuada en \$ 1.150, que permitiría salir de la pobreza a los hogares que percibieran ingresos por \$ 860. La AUH moviliza recursos que representan el 0,6% del PIB convirtiéndose en el Plan que involucra mayores recursos en relación con el producto de una economía de toda América latina (CEIL-PIETTE 2009)⁸.

La medida trasciende su carácter económico en cuanto impulsa el incremento de la matrícula escolar y el mejoramiento de las condiciones sanitarias. Esto se debe al establecimiento de requisitos en materia de educación y salud para la percepción del 20% de la AUH. Estos requisitos han constituido un fuerte aporte al mejoramiento de los niveles de vida de las clases subalternas con efectos positivos inmediatos: aumento de la matrícula escolar del 25% en 2010 y aumento en la inscripción en el seguro médico estatal Plan Nacer del 40 por ciento.

Un factor a tener en cuenta es el

⁸ Sin embargo, la incompatibilidad de la AUH con otros planes sociales genera un reemplazo de planes por ésta, implicando un menor desembolso de nuevos recursos hacia las clases subalternas que el publicitado oficialmente. Según Lozano y Raffo (2010), la sustitución de planes también implicaría que de los \$ 8.400 millones previstos para el plan, el ahorro provisto por la sustitución de planes aportaría unos \$ 4.100 millones, siendo el desembolso de nuevos recursos unos \$ 4.300 millones.

impacto de la inflación en el deterioro de los ingresos de las clases subalternas. En este sentido, el gobierno ha manifestado la importancia de actualizar los montos de la AUH y dispuso en 2010 un incremento de un 22%, de \$ 180 a \$ 220 por hijo menor y de \$ 720 a \$ 880 por hijo discapacitado. Esta política se amplió en 2011 hacia una asignación por embarazo.

Aun ante las dificultades de poder establecer rigurosamente el impacto de esta política, podemos señalar que representa una profundización de las políticas de ingresos inauguradas desde 2003 orientadas, sobre todo, a elevar los “pisos” de ingreso de las clases subalternas, y abre un mejor panorama para presionar por mover los “techos” en materia de distribución funcional y de salarios reales. Asimismo, constituye un elemento clave en la conformación del proceso de radicalización progresista en tanto expresa en una acción política la estrategia de alianza con las clases subalternas profundizada después de la derrota, tanto en el “conflicto del campo” como en el nivel electoral, que sufrió el oficialismo entre 2008 y 2009.

4. El lugar del conflicto en el proceso de radicalización progresista

Si bien el kirchnerismo apareció desde un comienzo como una fuerza de cambio por sus políticas

en materia de derechos humanos, educación, ingresos e integración latinoamericana, nos referimos a un proceso de *radicalización progresista* ya que, frente a la pérdida de adhesiones al interior de la clase dominante y la conformación del alineamiento de derecha, el kirchnerismo profundiza la estrategia de confrontación contra sus adversarios y procura recostarse más sobre los sectores productivos aliados y, crecientemente, sobre las clases subalternas. Es necesario señalar que para comprender este proceso no se deben observar sólo las políticas económicas de forma aislada sino la dinámica conflictiva a partir de las cuales éstas se abren paso. Por un lado, el conjunto de medidas anticrisis se va desarrollando con otras que inciden directamente sobre el campo de la lucha de clases en el nivel local. En este plano podemos mencionar el vasto conflicto con el Grupo Clarín y los principales oligopolios mediáticos, a partir del impulso y sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Por otra parte, la confrontación se convierte en la estrategia de acumulación primordial, reacomodando fuerzas dominantes y subalternas. Esto genera un terreno fértil, tanto para el desarrollo del componente “herético” del peronismo dentro del oficialismo como para incrementar el debate público y la disputa, en un proceso de conflictividad en el cual pueden desarrollarse las

diversas expresiones políticas y sociales de las clases subalternas.

La “**Ley de Medios**” representa una iniciativa democratizadora que apunta a la desconcentración y favorece una mayor pluralidad de perspectivas ya que prevé la repartición de licencias en tres tercios: uno para privados, otro estatal y un tercero para organizaciones sin fines de lucro. Su contenido anti-monopólico, derivado de la limitación y regulación de licencias que promueve, ha recrudecido el conflicto que el oficialismo ya mantenía con los principales grupos económicos ligados con la comunicación, entre el que destaca el Grupo Clarín, tanto por ser el principal concentrador de medios en el nivel nacional como por el decidido papel jugado en la confrontación. Dicho grupo había sido afectado previamente por la desprivatización y **socialización de la emisión de fútbol**, cuyo monopolio poseía, y por la actual disputa en torno del principal insumo de la prensa escrita a partir de la incidencia estatal de proyección anti-monopólica en Papel Prensa, confrontando también con el diario La Nación. El escenario se desarrolló entonces en una creciente polarización, donde los principales medios comenzaron a cumplir más explícitamente el papel de intelectual orgánico (en sentido gramsciano) del alineamiento de derecha, promoviendo las líneas de debate, habilitando y dando aire a diversas figuras de la oposi-

ción así como manteniendo la confrontación y directiva a través de sus líneas editoriales.

Es interesante resaltar que en este contexto aparecen dentro de la señal estatal y otros medios, voces disidentes que comienzan a promover una mirada crítica sobre la comunicación, algunos aliándose explícitamente con el gobierno, pero cubriendo un espectro de pensamiento crítico que lo sobrepasa. Asimismo, se observa la profundización de la estrategia oficial de recuperar la confrontación en las calles y en las plazas para dar cauce a las políticas públicas. El avance de la **confrontación gobierno-oposición de derecha**, que expresan distintos proyectos de gobierno y alianzas de clases, ligada el primero al neo-desarrollismo y el segundo a la reacción neoliberal, plantea una doble tensión: una que podríamos denominar restrictiva y otra, expansiva.

La **tensión restrictiva** se refiere a que se gesta una polarización que tiende a consolidar una reformulación del bipartidismo, desgastado en 2001, en dos nuevos polos de centro-izquierda y centro-derecha, ocupando el oficialismo el primero y la oposición conservadora el segundo, que dificulta la emergencia y desarrollo de opciones basadas sobre las clases subalternas con proyecciones más transformadoras que pudieran aportar en la conformación del proyecto de orientación socialista. Ésta es la encrucijada en la que se encuentran por ejemplo tanto

el Nuevo Encuentro como Proyecto Sur, fuerzas que contienen organizaciones diversas del campo del progresismo y la izquierda, y que deben construir sus estrategias frente a un escenario político caracterizado por la complejidad y la polarización, tendiendo el primero a generar crecientes acuerdos con el oficialismo, mientras que el segundo procura capitalizar el perfil antikirchnerista, acumulando referencia a través de los espacios provistos por los grupos económicos de la comunicación. Al mismo tiempo ambas fuerzas buscan desarrollar sus lazos con los movimientos sociales a través de las distintas organizaciones y plantean la necesidad de gestar políticas profundas que habiliten un proceso de transformación social favorable a las clases subalternas. Esta tensión conllevó en 2011 a la incorporación del Nuevo Encuentro al arco oficialista y al debilitamiento y desmembramiento de Proyecto Sur.

La **tensión expansiva**, por su parte, implica la posibilidad desde el conjunto de organizaciones de las clases subalternas de promover mejoras, ya sea a través de políticas como de disputas sectoriales a través del conflicto, aprovechando el espacio abierto por la crisis interburguesa. Esta crisis está caracterizada por el fin del

momento hegemónico alcanzado hacia 2006 y el nuevo desarrollo del enfrentamiento al interior de las clases dominantes, entre, por un lado, sus elementos más progresistas dispuestos a aceptar algún grado de acuerdo y transferencias de recursos hacia las clases subalternas, y, por otro, las facciones más reaccionarias del capital junto con las principales corporaciones agrarias y los partidos de derecha. Este contexto genera un marco propicio para el desarrollo de otros núcleos de conflicto favorables a las clases subalternas, no necesariamente contenidos en la disputa entre el oficialismo y la oposición conservadora. Esto puede ser visto en el caso del matrimonio igualitario, que siendo un proyecto del Nuevo Encuentro, fue apoyado por el gobierno a pesar de encontrar algunas resistencias en su interior, y logró abrirse paso confrontando a la derecha política, los medios y la cúpula de la iglesia católica. También se visualiza en los crecientes conflictos por aumentos salariales así como por la repartición de los recursos involucrados en los planes sociales y laborales. Este contexto también es favorecido por una amplia apertura al debate a partir del impulso emergente de democratización de la comunicación⁹.

Finalmente podemos mencionar

⁹ Esta potencialidad expansiva del conflicto puede verse a tal punto que comienza a reinstalarse la discusión sobre la ganancia empresaria, llegando a plasmarse en una propuesta de participación de los trabajadores sobre el 10% de las ganancias de las empresas en las que trabajan.

dos hitos que parecen fortalecer la tensión expansiva del escenario político. En primer lugar, la muerte de Néstor Kirchner priva al oficialismo del que, junto con Cristina, fue su principal cuadro, pero al mismo tiempo dota al movimiento de la potencia de la construcción del mito. Ya Gramsci (2003) identificaba la centralidad del *mito* vinculado con la función de “creación de una fantasía concreta que actúa sobre un pueblo disperso y pulverizado para suscitar y organizar su voluntad colectiva” (Gramsci, 2003:10). El kirchnerismo, que venía reconstituyendo al peronismo como identidad popular y actuando sobre el pueblo “pulverizado” que dejaron las últimas tres décadas de neoliberalismo, da un salto desde ese momento en su capacidad de movilizar las pasiones, en su posibilidad de “volverse pueblo” en la construcción de una voluntad colectiva a partir de la articulación de diversos grupos sociales subalternos, pudiendo dar origen a una fuerza social y política transformadora que avance en un proceso de acumulación de fuerzas. Es la masiva movilización popular que emergió y se hizo visible en ese momento lo que convalida esta hipótesis y motiva este proceso. Este hito permitió acelerar la construcción de hegemonía desde el oficialismo y dar nuevos bríos al proceso de radicalización. Esto nos lleva al segundo hito: el escenario electoral de 2011. Con la efectividad

demostrada de las políticas anticrisis para contener los impactos más nocivos de la crisis capitalista mundial, el fortalecimiento de la figura de la Presidenta hizo tambalear al alineamiento de derecha, haciendo dimitir de la contienda nacional a su principal referente, Macri, y culminando en una dispersión de la propuesta conservadora en un amplio abanico que saldría fuertemente herido de la contienda electoral. Las elecciones de 2011 dejan un saldo histórico para el kirchnerismo con la reelección de Cristina Fernández de Kirchner con un 54% de los votos, una fuerte derrota para la oposición de derecha y la posibilidad de una nueva fuerza de centro-izquierda, el Frente Amplio Progresista, que quedando en un lejano segundo lugar procurará encabezar el arco opositor tensionado por la fuerte persistencia del alineamiento de derecha.

5. Conclusiones: rasgos, alcances y límites del neodesarrollismo

Se gestó en la Argentina un nuevo modelo de acumulación a partir de 2002, que expresa cambios en la correlación de fuerzas centrándose sobre la fracción productivo-exportadora del capital. Al mismo tiempo que el Estado comenzó a desplegar una serie de acciones “compensatorias” en busca de lograr adhesión y gobernabilidad, reorganizando los equi-

librios inestables de compromisos entre las fracciones de clase. Se inició una fase expansiva de acumulación capitalista basada sobre una lógica productivo-exportadora, estructurada a partir del procesamiento y exportación de recursos naturales (tierra, petróleo, minería) y las industrias automotriz, siderúrgica y química. Si bien se mantienen rasgos regresivos en el sector fabril producto de la reestructuración impuesta bajo el régimen neoliberal (1976-2001), el nuevo tipo de cambio junto con otras políticas habilitaron una fuerte recuperación de la producción industrial, y sumado al crecimiento de la construcción promovieron un modelo legitimado sobre la base de la recuperación del empleo y el incremento de los “pisos” de ingresos de las clases subalternas. Aun así, no llegó a impulsarse una masiva redistribución del ingreso, sino que el bajo costo laboral en condiciones de aumento de la productividad sigue constituyendo una de las claves fundamentales de la ganancia empresaria.

El surgimiento de la crisis mundial profundizó un cúmulo de tensiones propias del modelo y amenazó con desestabilizarlo. En este contexto, el gobierno desplegó un activo plan anticrisis que confirma el carácter neodesarrollista que busca imprimirse al modelo, procurando mantener tanto los pilares de estabilización del modelo posconvertibilidad (superávit fiscal y comercial) como el empleo y la

producción. Se observa un fuerte crecimiento del gasto público para sostener la demanda y estimular la actividad económica, claramente contrastante con los planes de ajustes impuestos por la Unión Europea a España y Grecia. Lejos de realizarse un nuevo “salvataje” al sector financiero, se estatizaron las AFJP recuperando el Estado recursos clave para el financiamiento del plan anticrisis. Se movilizaron recursos hacia los sectores del capital productivo y la obra pública con el objetivo de mantener la actividad y el empleo. Se profundizó el rol del Estado, característico en la conformación del modelo, de constituir un actor fundamental en la implementación de mecanismos de transferencias de recursos con el fin de estabilizar las relaciones entre las fracciones de clase. Estas medidas distanciaron al gobierno de los proyectos de carácter neoliberal, que aparecen encarnados en la oposición de derecha. Por otro lado, se diferencia de una perspectiva de orientación socialista en tanto no se logra generar una masiva redistribución del ingreso ni se impulsa decididamente formas alternativas de producción y poder popular.

El escenario político se convulsionó en 2008 con el “conflicto del campo” y la conformación del alineamiento de derecha que logró derrotar al oficialismo en dicho conflicto y en las urnas en 2009. Este momento actuó como punto de inflexión en el cual el oficialis-

mo procuró profundizar su proyecto sobre la base de la alianza entre los agentes de la producción industrial así como en las clases subalternas. Se dio origen al proceso de radicalización progresista conformado por una estrategia de confrontación con los grupos de las clases dominantes aliados con el alineamiento de derecha y un conjunto de medidas favorables a las clases subalternas. Este contexto político, signado por el conflicto, plantea una doble tensión: una tensión restrictiva ligada con la polarización entre oficialismo y oposición de derecha, que dificulta la emergencia de otras fuerzas alternativas por fuera de dichos espacios; y una tensión expansiva, en tanto las disputas al interior de las clases dominantes habilitan el desarrollo del conflicto, alentando incluso iniciativas parlamentarias favorables a las clases subalternas. De este modo aparece el debate y movilización en torno de políticas diseñadas tanto por las fuerzas oficialistas como por otras fuerzas cercanas y cuyas victorias representan avances para el conjunto de las clases subalternas en el terreno de la lucha de clases, como lo es claramente el perfil antimonopólico y democratizador de la "Ley de Medios", el matrimonio igualitario, la reestatización de las AFJP y la Asignación Universal por Hijo que mejora en un breve plazo las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de las clases subalternas, entre otras.

El proyecto neodesarrollista ha mostrado como alcance la posibilidad de impulsar un modelo de perfil productivo, con activas políticas de Estado que recupera la inversión pública y busca generar transferencias de recursos para estabilizar la nueva correlación de fuerzas emergida post 2001. Este modelo permitió reducir el desempleo y se complementó con diversas políticas de ingreso a partir de 2003 que elevan los "pisos" de vida de las clases subalternas, alcanzando mejoras salariales significativas para un reducido grupo dentro de los asalariados del sector privado. Sin embargo, podemos señalar algunas tensiones presentes en el modelo actual.

Por un lado encontramos límites estructurales, ligados a la fuerte extranjerización y concentración económica, que implica un sujeto dominante muy distinto a la "burguesía nacional" apelada en el discurso. La propuesta en torno de la alianza entre la fracción productiva del capital y los trabajadores encuentra límites objetivos en los rasgos estructurales del capital productivo en la Argentina. Su orientación primordialmente exportadora genera por un lado, un impulso a la dinámica inflacionaria (principalmente en alimentos) en tanto los empresarios tienden a poner los precios en el mercado interno en niveles similares a los que pueden conseguir en el externo, y por otro lado, esta misma lógica exportadora hace

que el salario, lejos de aparecer como una condición fundamental para la realización del capital, tienda a representar un costo, que busca ser limitado en pos de aumentar la competitividad internacional y los márgenes de ganancia. Esto aumenta las tensiones hacia la posibilidad de desarrollo del mercado interno basado sobre el consumo popular. La “burguesía nacional” construida en el discurso parece carecer de bases objetivas dada la profundización de procesos de extranjerización que presenta la economía argentina. Entre las 500 empresas más grandes, aquellas con más del 50% de participación extranjera pasaron de apropiarse el 35% de las utilidades totales en 1993 al 90% en 2005. De dicho panel, “Si bien prácticamente un tercio de las empresas son de capital de origen nacional, dicha relación no se mantiene cuando se analizan los agregados macroeconómicos. Para el año 2007, el 81,7 % del valor bruto de producción del total del panel y el 83,8 % del valor agregado del mismo, son generados por empresas con participación de capital extranjero” (INDEC, 2009:11). Si bien dentro de la cúpula empresaria existen algunas importantes empresas de capital local, su propia lógica transnacionalizada y el predominio general del capital extranjero son notorios. Tampoco parece posible hallar el rol de la “burguesía nacional” en los agentes de la fracción de PyMEs, ya que si bien

está compuesta por empresas que son clave para la producción de empleo y tienen una mayor orientación al mercado interno, su rentabilidad y condición de existencia yacen ligadas al contexto de concentración económica de grandes empresas monopólicas u oligopólicas. Así la garantía de poder profundizar el proceso de radicalización en materia económica parecería pender de la posibilidad de volcarse crecientemente sobre las clases subalternas, disciplinando al capital concentrado y abriendo cauces a un proceso de distribución del ingreso, redefiniendo el sistema tributario e impulsando formas alternativas de producción sustentable.

Asimismo, el afianzamiento de la “dualidad estructural” del sector manufacturero implica que el núcleo reducido de 100 empresas líderes ligadas con el procesamiento de recursos básicos exhiban una balanza comercial positiva (US\$ 15.810 millones), mientras que el resto es altamente deficitario (US\$ -16.529 millones) denotando el poder social de este conjunto de agentes a partir de la posesión de divisas y su creciente concentración sobre la base del aprovechamiento del bajo costo laboral y las ventajas comparativas naturales (Azpiazu y Schorr, 2010). A su vez, la vulnerabilidad externa del modelo queda ligada con las oscilaciones de los precios de los *commodities*. Aquí aparece la cuestión de los recursos naturales, que ocupan un lugar clave en

el modelo y se encuentran extranjerizados y depredados por lógicas que privilegian la consecución de máxima ganancia en el corto plazo por sobre la preservación de los recursos. En este escenario cobra creciente relevancia la potencialidad de la unión latinoamericana tanto en materia económica como política y social.

Finalmente debemos señalar que las disputas al interior de las clases dominantes han dinamizado el escenario político abriendo la posibilidad de profundizar políticas favorables a las clases subalternas. Así, la estrategia oficial de buscar mayor apoyo en las mismas ante la pérdida de adhesiones entre distintos grupos de las clases dominantes, genera un escenario de disputa favorable a la proyección de los intereses subalternos, tanto al interior de las fuerzas de gobierno como al exterior de las mismas. El avance exitoso del proceso de radicalización progresista para recomponer la

hegemonía oficialista, evidenciado en las elecciones de 2011, abre la potencialidad de profundizar el rumbo de cambio que viene transcurriendo la Argentina en consonancia con el escenario latinoamericano e incluso algunos sectores vislumbran la posibilidad de recuperar perspectivas ligadas con la generación a la cual pertenecen los Kirchner, en torno del peronismo como vía hacia un socialismo nacional. La muerte de Néstor Kirchner deja un escenario de incertidumbre en tanto impide un nuevo mandato consecutivo de los líderes originarios del kirchnerismo; posiblemente el escenario futuro se defina por la disputa de la “herencia” y quiénes logren capitalizar el escenario hegemónico, tanto en el ámbito político nacional como hacia adentro del movimiento que conforma al oficialismo, entre sus elementos más conservadores y sus actores más progresistas.

Bibliografía

- Aruguete, Eugenia. y Rafael Selva. 2009. “Reacciones de Política Económica frente a la crisis internacional” en *Nota Técnica* N° 18. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- Azpiazu, Daniel y Martín Schorr. 2003. *Crónica de una sumisión anunciada. Las renegociaciones con las empresas privatizadas bajo la administración Duhalde*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- Azpiazu, Daniel y Martín Schorr. 2010. “La industria argentina en la posconvertibilidad: reactivación y legados del neoliberalismo” en *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía* Vol. 41 N° 161, UNAM, México.

- Azpiazu, Daniel, Pablo Manzanelli y Martín Schorr. 2011. "Concentración y extranjerización en economía argentina posconvertibilidad", FLACSO, Buenos Aires.
- Basualdo, Eduardo. 2007. "Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación estructural de la economía". Documento N° 1, Maestría en Economía Política Argentina, Área de Economía y Tecnología de la FLACSO. [www.flacso.org.ar/economía]
- Castellani, Ana. 2010. "Estado y grandes empresarios en la Argentina de la posconvertibilidad" en *Cuestiones de Sociología. Revista de Estudios Sociales* N° 5/6. UNLP. En prensa.
- CEIL-PIETTE. 2009. "Asignación Universal por Hijo en Argentina" en Nota Técnica N° 23. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- FISyP. 2009. "Informe de coyuntura, primer trimestre 2009" en www.fisyp.org.ar/WEBFISYP/INFCOY.doc
- Gramsci, Antonio. 2003. "Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno", Buenos Aires, Nueva Visión.
- GT Economía Mundial. 2009. "Declaración sobre la crisis mundial". CLACSO. <http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2009/nro365/clacso.html>
- INDEC. 2009. "Grandes empresas en la Argentina", sobre ENGE, febrero 2009.
- Klitenik, Fabio. 2010. "Evolución reciente de los precios internacionales. Causas y respuestas políticas" en *Nota Técnica* N° 27. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- Lozano, Claudio. 2008. "Una mirada sobre la coyuntura económico y social". IEF-CTA. En http://www.aterosario.org.ar/IMG/article_PDF/article_252.pdf
- Lozano, Claudio y Tomás Raffo. 2009. "Bicentenario sin hambre. Evaluación del programa de asignación universal por hijo para la protección social" en <http://www.ingresocudadano.org/IDEP-CTA.pdf>
- Marx, Karl. 2007 [1885]. *El Capital*. Tomo II. México D.F., Siglo XXI.
- Ortiz, Ricardo y Martín Schorr, 2009 "Crisis internacional y alternativas de reindustrialización en la Argentina", ponencia, XXVII Congreso ALAS, Buenos Aires.
- Poulantzas, Nicos. 1981 [1976]. *Las clases sociales en el capitalismo actual*. México D.F., Siglo XXI Editores.
- Sevares, Julio. 2010. "Argentina: Los bancos te dan sorpresas", en *Olafinanciera*, N° 7, septiembre-diciembre, UNAM, México.
- Varesi, Gastón. 2009a. "Empresas privatizadas y acciones estatales en el modelo posconvertibilidad, 2002-2007" Ponencia, XXVII Congreso ALAS, Buenos Aires.
- Varesi, Gastón. 2009b. "Inflación, transferencias y distribución del ingreso en la Argentina posconvertibilidad. ¿Cómo se gestan y a quiénes benefician?" en *Sociohistórica. Cuadernos del CISH* N° 26, UNLP, La Plata.

- Varesi, Gastón. 2010, "La Argentina posconvertibilidad: modelo de acumulación." en *Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía* Vol. 41 N° 161, UNAM, México.
- Varesi, Gastón. 2010b. "El circuito productivo sojero argentino en el modelo posconvertibilidad. Una aproximación desde el enfoque de análisis regional" en *Cuadernos del CENDES* N° 74, UCV, Caracas.